

Exclusión y Violencia disolvente en México. La reconstrucción populista de la Nación¹

Julio Aibar²

Resumen

Hace menos de tres décadas, José María Aricó planteaba que los países latinoamericanos “todavía viven con vigor el problema de su destino nacional”³. Ese señalamiento se basaba en la observación de dos conjuntos de hechos incontestables: por un lado, los importantes grados de desarrollo y complejidad que habían alcanzado algunas sociedades; la construcción de Estados con importantes capacidades para intervenir en la vida social y la organización en grandes sindicatos y corporaciones que las clases subalternas habían logrado, por otro, era evidente la escasa interpenetración entre esa sociedad civil, la economía y el Estado. Así, las latinoamericanas eran sociedades avanzadas, pero de desarrollo tardío, pertenecían a la categoría que Gramsci conceptualizó como “Occidentales periféricas”. En ellas, la Sociedad Política mantiene una capacidad de iniciativa superlativa, ya que sus posibilidades, tanto para crear y regular el conflicto, como para modelar a la sociedad, es mucho mayor que la que tiene en “Occidente puro”.⁴ Característica que lejos de ser una virtud, era evaluada negativamente y constituía una de las explicaciones que se daban al flagelo devastador de los golpes de Estado recurrentes. Ahora, como veremos más adelante, puede representar una verdadera oportunidad en tanto hace posible atender a la emergencia por medio de la implementación de cambios importantes en tiempos relativamente cortos.

En la línea conceptual del comunista sardo, Aricó pensaba que lo nacional no era el dato inicial que conjunta un territorio determinado con identidades establecidas, sino el campo problemático, “necesariamente obligado del proyecto hegemónico”. Asimismo, entendía

¹ Artículo publicado en la revista *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 17 (58), pp. 53-64, 2012.

² Julio Aibar, es profesor investigador de la FLACSO, Sede México y coordinador del seminario de Investigación titulado “Procesos políticos contemporáneos de Latinoamérica”.

³ Entrevista de Horacio Creso y Antonio Marimón, publicada en *Revista de la Universidad de México*, Vol. XXXIX, 24, abril de 1983. Reproducido en *Vuelta Sudamericana*, Vol. 1, 2, septiembre de 1986, Buenos Aires, correcciones de J. M. Aricó.

⁴ Un desarrollo más amplio de este argumento se puede encontrar en Juan Carlos Portantiero, *Los usos de Gramsci*, Series en Colección: El tiempo de la política, Folios Ediciones S.A., México, 1981; José M. Aricó, *La cola del diablo*, Colección: Metamorfosis, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005 y en Nora Rabotnikof y Julio Aibar, “El lugar de lo público en lo nacional popular: ¿una nueva experimentación democrática?”, Nueva Sociedad, Buenos Aires (en prensa).

a la Nación en su significado más amplio: como historia, cultura, psicología, estratificaciones seculares, tradición intelectual, moral y religiosa, hábitos, costumbres, lenguaje, formas literarias y civiles. Como conjunto inseparable de componentes dentro de los cuales las fuerzas postulantes de la sociedad moderna, el capital y el trabajo, “se mueven buscando dominarlo y hacerlo propio”.⁵

Lo que probablemente jamás pensó Aricó es que sería en México -uno de los países que, según su apreciación se ubicaba entre los más desarrollados de la periferia-, en el que tiempo después se presentaría con particular vigor y carga vivencial el problema de la Nación. Seguramente no imaginaba que sería en la tierra que lo cobijó en sus años de exilio, donde se plantearía de un modo tan básico y con tanta emergencia, la cuestión de la integración social, política y territorial. Es que, hasta hace no muchos años, resultaba casi imposible prever que tanta riqueza cultural y densidad social, que fascinó a antropólogos y sociólogos, estuviera hoy amenazada por la disolución; que en la tierra de Zapata y Villa hubiera tanta parálisis; que el Estado - actor principal de la vida social desde la época de Cárdenas y durante buena parte del siglo pasado- fuera ahora ampliamente rebasado y diariamente evidenciara su impotencia ante bandas criminales; que, en la tierra de Rivera, Orozco y Álvarez Bravo, hubiera tan poca denuncia y expresión pública de las demandas y los malestares.

En pocas palabras, ¿cómo es posible que, en el país que hizo una Revolución hace un poco más de cien años, que implementó profundas reformas sociales, que logró evitar golpes de Estado, se viva hoy un agudo proceso de desagregación y fractura social, política e inclusive territorial? ¿Cómo es posible que esa sociedad no haya logrado generar una fuerza política capaz de proponer medidas creíbles para superar esa situación?

En este trabajo sostendré que las respuestas a estas preguntas, en buena medida, hay que rastrearlas en la preeminencia aplastante del discurso neoliberal, que volvió virtualmente “imposible” siquiera imaginar la promesa de reconfiguración de una comunidad política incluyente.

Pero ese neoliberalismo, que tiene una expresión económica, política y cultural, que califica negativamente de “populista” a cualquier concepción más o menos integral de la sociedad, sin quererlo nos indica cual puede ser una de las salidas a la situación que vive

⁵ Aricó, José M. *La cola del diablo*. Series en (Metamorfosis). Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2005. Texto. P. 147

México. Da pie con ello a otra de las ideas centrales que se defenderán en este trabajo: que el populismo en tanto lógica que, por medio del reconocimiento de derechos y la articulación de demandas sociales, da lugar a la creación del sujeto colectivo Pueblo y que como práctica política que reivindica al Estado como actor social fundamental, puede ser una de las posibilidades de reconstrucción de la comunidad política en México, es decir, de la Nación.

Novedades viejas y malos augurios

La elecciones presidenciales de mediados de este año en México (1 de julio de 2012), fueron planteadas por todos los candidatos como un momento crucial en el que estaba verdaderamente en juego el país.⁶ Aunque esa advertencia la escuchamos frecuentemente en las campañas electorales de todo el mundo es indudable que, en el México actual, por la coyuntura que atraviesa y por las consecuencias de un proceso que viene desarrollándose desde hace al menos dos décadas y media, la misma parece cobrar un sentido mucho más vívido y real.

El rezago económico del país, las terribles consecuencias de la desigualdad y, fundamentalmente, la violencia desatada cuando el gobierno hace seis años le declaró la “guerra al narcotráfico” (que después pasó a ser llamado “crimen organizado”), hacen pensar que estamos viviendo momentos de profunda y acelerada desagregación y fractura social; degradación estatal e institucional y desintegración territorial.

Aunque esa situación en cierta medida se expresó en los diagnósticos iniciales de los programas electorales partidarios, hay numerosos indicios que hacen sospechar que ni los partidos ni los candidatos la dimensionaron adecuadamente. Si además tenemos en cuenta las propuestas que supuestamente apuntan a atender la situación descrita, las sospechas parecen confirmarse. En materia económica se propuso básicamente seguir el mismo

⁶ Los resultados oficiales de la elección presidencial son: Enrique Peña Nieto, candidato por Compromiso por México (PRI y Partido Verde) 38.2 %; Andrés Manuel López Obrador, candidato el Movimiento Progresista (PRD, PT, MC) 31.6 %; Josefina Vázquez Mota, candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) 25.4 % y Gabriel Quadri, candidato por el Partido Nueva Alianza (PANAL) con el 2.30 %.

La coalición de izquierda decidió impugnar las elecciones argumentando dos razones fundamentalmente: la compra masiva de votos por parte del PRI y la inequidad en la campaña electoral. En este sentido es de destacar que los principales medios de comunicación hace al menos 5 años han desatado una campaña en contra de López Obrador, principal figura de la izquierda electoral y a favor de Peña Nieto. La denuncia de la izquierda tiene una amplia aceptación social, muestra de ello es la posición asumida por el movimiento estudiantil surgido en la última etapa de la campaña. El movimiento #132, que denunció la intromisión desvergonzada de los medios masivos de comunicación, fundamentalmente de la poderosa Televisa, ahora rechaza los resultados de la elección.

rumbo iniciado hace dos décadas y media y, en materia de seguridad, no se propone más que ajustes y “correcciones” a las directrices fundamentales seguidas por el gobierno.

En contra de todos los pronósticos, en la campaña electoral, la violencia y la desigualdad reinantes en el país, no fueron temas ni referencia centrales del debate.

Pese al pobre desempeño económico, a los crecientes niveles de pobreza y desigualdad, la alarmante concentración de la riqueza y el paupérrimo crecimiento de México, la economía fue tratada por los partidos y candidatos de un modo superficial y pasajero. Por su lado, la violencia que, en menos de 5 años cobró alrededor de 67 mil muertos; 10 mil desaparecidos y otros miles de desplazados; tampoco fue una de las temáticas que marcará el debate político.

Si ese fue un dato curioso de las elecciones presidenciales, más curioso resultó que el partido en el gobierno fuera quien, en la última etapa de la campaña, retomó esas temáticas para hacerlas el centro de su discurso. La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) reivindicó la estabilidad macroeconómica, acusó al candidato de las izquierdas de querer endeudar al país -en tanto supuestamente aplicaría un programa de gobierno de corte “populista”- y lo caracterizó como el “candidato del caos”. Al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su parte, lo acusó de haber frenado las llamadas “Reformas Estructurales” en el Congreso, las que, para el sentido común de las élites mexicanas representa -en una especie de *deja vu* siniestro del credo neoliberal que hace dos décadas era el *discurso único* en Sudamérica-, “el” camino para lograr el crecimiento; la verdadera chispa que supuestamente detonará la economía del país.

En lo que a la seguridad se refiere, la derecha gobernante, desde una virulencia verbal exacerbada acusó irresponsablemente a todo candidato de la oposición que en las encuestas levantaba sus niveles de aceptación, de estar “coludido con el crimen organizado”. Cabe recordar en relación a este punto dos cuestiones: en primer lugar, la acusación de pertenecer al crimen organizado con pruebas o, como fue en este caso, sin ellas, puede representar la muerte física, real de los acusados; en segundo lugar, que la procuración de justicia es en México responsabilidad del poder ejecutivo, es decir del gobierno.

A todos los candidatos y partidos de la oposición, tanto la candidata del partido oficial como el propio presidente de la República, conminaron a que expresaran claramente por si continuarían o no con las políticas de “ataque al crimen organizado”.

La izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por su lado, en lo económico propuso centralmente generar recursos a partir del ahorro por reducción de

sueldos y gastos de la alta burocracia estatal. Esa era, en el discurso del candidato de la izquierda, la estrategia central –casi excluyente–, para mejorar el desempeño económico del país. Aclaró en todo momento que no tenía previsto implementar nuevos esquemas de impuestos y, en un mensaje tranquilizador para los grandes empresarios, manifestó que no pensaba afectar las ganancias de los más ricos. Respecto a las “reformas estructurales”, demanda central de las cámaras empresariales, López Obrador se pronunció por no llevarlas adelante, aunque sin explicar claramente por qué se oponía.

En lo que al problema de la violencia se refiere, sus propuestas fueron muy tibias, generales y poco claras. Se limitó a plantear algunas medidas sociales para atender a la pobreza, especialmente de los jóvenes y a formular algunas muy vagas medidas para mejorar el desempeño de las policías. En la lógica del candidato de la izquierda, la causa fundamental de la violencia del crimen organizado es la pobreza.⁷

El candidato del PRI, en lo económico propuso básicamente seguir adelante con las políticas actuales, se comprometió además a hacer realidad uno de los sueños incumplidos de la administración del PAN: llevar adelante las Reformas Estructurales. En el discurso del joven candidato del PRI, la reforma energética (que consiste básicamente en abrir PEMEX a la inversión privada), la laboral (consistente en precarizar las condiciones laborales), la hacendaria –fiscal (impulsar el IVA generalizado), serán la prioridad fundamental de su administración.

Tanto para el gobierno, como para la candidata oficial y en acuerdo con la mayor parte de las élites académicas, intelectuales y económicas, los medios masivos de comunicación, para el candidato del PRI, la no aplicación de las reformas mencionadas son la explicación del estancamiento de México. Lejos de pensar que las penurias económicas del país fueron causadas por las políticas económicas de corte neoliberal que, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se vienen aplicando en el país y desconociendo la realidad reciente y actual de numerosos países del mundo, las élites vernáculas mayoritariamente atribuyen a la “falta de profundidad” de esos planes económicos, la causa fundamental del pobre desempeño de México.

⁷ Pese a la tibieza de las propuestas de López Obrador, considero que hay diferencias sustantivas respecto a sus contendientes. En su propuesta para combatir la violencia, al menos no propuso incrementar la militarización y la violencia estatal; en lo económico, como se señaló, se pronunció en contra de las “Reformas Estructurales” de corte neoliberal.

En lo que a la política de seguridad se refiere, el programa del PRI, en buena medida se limitó a reproducir las propuestas y medidas del partido oficialista. El candidato Peña Nieto expresó reiteradamente –antes y después de las elecciones-, que seguirá con la política de “combate al crimen organizado” y agregó que sólo haría algunos ajustes y correcciones menores. Las principales medidas contenidas en la “Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012 – 2018” de PRI, son: fortalecer la cooperación entre países para frenar el contrabando de armas y dinero y para combatir la corrupción de las aduanas; afianzar el control de las fronteras para evitar el tránsito ilegal de personas y mercancías; profesionalizar las fuerzas policiales, crear una policía altamente especializada (gendarmería nacional); incrementar el número de efectivos; combatir la corrupción en dichas fuerzas y mejorar sus condiciones laborales; combatir los circuitos financieros del dinero ilegal; combatir las adicciones y erradicar la informalidad económica.⁸ Al final de la campaña, Peña Nieto anunció además que contrataría al General Oscar Naranjo⁹ como asesor de su política de seguridad.

Como lo hizo el gobierno y como propuso la candidata oficialista, el PRI trató en todo momento de disociar la seguridad como política pública de la obligación del Estado de custodiar y garantizar los Derechos Humanos de la población. Aunque se hablara todo el tiempo de Estado de Derecho, la seguridad no se entendió como un derecho humano que no autoriza a suprimir otros derechos humanos. Con ello quedó en claro -aunque se afirmaba que se privilegiarán las fases preventivas e investigativas-, que la política de seguridad seguirá siendo preeminentemente represiva.

Al inicio del apartado mencioné que dos cuestiones fundamentales no fueron planteadas en la campaña electoral, vale la pena preguntarse ahora: si en lo económico el gobierno tuvo un desempeño tan pobre y en la custodia de la seguridad de los mexicanos sus resultados son francamente catastróficos, ¿por qué la oposición no hizo de esas cuestiones los temas centrales de su campaña?

La respuesta inmediata que a esa pregunta se dio entre las élites, es que las políticas económicas y de seguridad no se tematizaron porque básicamente no hay alternativas reales a las que ya se vienen aplicando. En otras palabras, las élites intentaron con relativo

⁸ Para consultar la plataforma del PRI: http://www.ulsamex.mx/votolasallista/docs/Plataforma_PRI.pdf

⁹ Óscar Naranjo fue Director General de la Policía Nacional de Colombia (2007 – 2012). Ampliamente condecorado por el desempeño al frente de esa institución, es miembro de la *International Drug Enforcement Association* (filial de la DEA).

éxito instalar la idea de que no existe siquiera la posibilidad de cuestionar seriamente, de fondo, los paradigmas dominantes. Muestra de ello es que hace seis años López Obrador, por proponer un tibio programa de reformas económicas fue calificado como “un peligro para México”.

Si el discurso de las élites “hace sentido” con extrema facilidad, es porque hay en el país narrativas muy arraigadas que lo hacen verosímil.

En México, hace muchos años que se ha sedimentado cierto sentido común, tanto entre algunos sectores del PRI, como entre sus detractores de izquierda y de derecha, que asocia la Nación y el nacionalismo con la idea de un Estado proteccionista, corporativo y autoritario. También el nacionalismo parece ser indisociable de la Revolución Mexicana y, sobre todo, del régimen político que fue construyéndose a lo largo del proceso posrevolucionario.

Así, la historia se presenta, desde el triunfo de la Revolución hasta el gobierno de Salinas para unos, o hasta la derrota electoral del PRI en 2000 para otros, como un proceso lineal con momentos subsecuentes necesarios. Desde la historia oficial forjada en buena medida por el Estado priísta, esa sucesión -valorada positivamente-, comenzó con la institucionalización (Gobierno de Calles); siguió con las reformas sociales (gobierno de Cárdenas) y se consolidó finalmente con el desarrollo. La versión crítica en cambio, ve en esos mismos momentos la consumación misma de un proyecto autoritario: a la institucionalización la codifica como la expansión estatal antidemocrática y corporativa, a las reformas sociales las entiende como cooptación y disciplinamiento de la sociedad y al desarrollo como dirigismo estatista (la derecha liberal) y como profundización capitalista (la izquierda). Ninguna de esas visiones de la historia reconoció los distintos quiebres y rupturas, ni dimensionó los alcances y la profundidad de las medidas implementadas en, por ejemplo, el periodo cardenista.

La confluencia de la crítica de la izquierda ortodoxa, de la derecha neoliberal y de sectores del propio PRI, explica en buena medida el alcance, la profundidad y la vigencia de ese sentido común opuesto a lo nacional revolucionario.

Todo ello devino en un consenso nacional muy fuerte, del que participaron no solo actores políticos, sino también élites académicas, culturales y sociales y nuevos actores económicos. La concurrencia de tantos sectores y actores se debió en buena medida a que aquello que se había identificado como nacionalismo revolucionario, además de erosionarse en el tiempo, experimentó dos rupturas fundamentales. La primera fue el 2 de Octubre de 1968, en la que la brutal represión al movimiento estudiantil que

demandaba una apertura democrática, dejó al descubierto el alejamiento del régimen con la población. La segunda ruptura fue la crisis terminal del modelo económico asociado a la matriz revolucionaria que, en la década de los años ochenta, abrió la puerta para que el sector neoliberal del PRI se impusiera y después negara los principios sobre los que se había fundado ese partido.

Aunque parte de la izquierda logró reagruparse y mantuvo las demandas por la democratización, fue la derecha liberal la que logró tener mayor peso e iniciativa política. Se apropió de las demandas democráticas reconduciéndolas hacia el formato liberal-procedimental e impuso la ideología del libre mercado.

A partir de ahí, todo discurso de contenido nacional fue asociado con lo arcaico, en tanto expresión melancólica de una comunidad perdida que, en nombre del pueblo, negaba al individuo y al ciudadano; como un intento de reedición de un Estado ‘paternalista’ que sofoca la potencia de los agentes económicos. Toda esa cadena de valoraciones negativas se va a condensar en la palabra “populista”.

Ese nuevo consenso neoliberal, aunque tuvo vaivenes y redefiniciones, se mantiene en sus núcleos definitorios hasta el presente. Ello explica, al menos en parte, por qué hoy en día parece no ser posible pensar en programas económicos redistributivos e incluyentes, en un Estado con mayor presencia en la vida social y que no solo asuma las funciones represivas.

Tras las huellas conceptuales de la Nación

El predominio neoliberal aplastante hizo olvidar que en la década de los setenta y comienzos de los ochenta, desde diferentes sectores de la izquierda no ortodoxa, se comenzó a revalorizar la cuestión nacional. Uno de esos sectores- más cercanos al PRI-, visualizó el cambio de época y anticipó la posible hegemonía neoliberal. Otro de filiación socialista- bajo una mirada gramsciana y distanciándose de la ortodoxia marxista-, señaló la importancia analítica y práctica de las especificidades regionales y de la cuestión nacional.

Aun cuando existieron diferencias interpretativas importantes, compartieron un elemento fundamental: interpretaban a la historia mexicana como un largo proceso de luchas que intentaron darle a la Nación un contenido popular. Así, su objetivo fue resignificar esas experiencias para convertirlas en un referente para el presente.

Las propuestas recuperaron elementos del nacionalismo revolucionario y las experiencias populares asociadas a éste y derivaron de ahí una redefinición de la idea de Nación y de los sectores sociales capaces de emprender un proyecto de transformación social.

Rolando Cordera y Carlos Tello, publicaron en el año 1981 un libro titulado *México. La disputa por la Nación*. En lo que entendían era una coyuntura política y económica clave, destacaron la urgencia de redefinir los sentidos de la Nación y del nacionalismo para hacer frente a la ofensiva neoliberal que, de acuerdo con su lectura del momento, era inminente.

Sostuvieron que en la historia de México siempre existió una relación estrecha entre reformas económico-sociales y la puesta en acto de una '*política de masas*'. Esto es, que toda transformación profunda en el modelo de desarrollo, se realizó a partir de un proceso de reformas que tuvo como principales destinatarios y actores a las masas populares y que el Estado fue el principal promotor de esa política. Ello tuvo dos consecuencias importantes: por una parte, la consolidación de una relación estrecha entre los sectores populares y el Estado, que redundó en beneficios concretos y en una fuerza social fundamental para concretar procesos de reformas. Por otra parte, la fructífera relación entre reformas y política de masas, evidenció que el Estado sólo podía alcanzar su consolidación por medio de la inclusión —al menos parcial— de los sectores populares en el modelo de desarrollo. Los autores señalaron que “las grandes masas del pueblo, en los hechos, buscan y han buscado que sus organizaciones elementales (sindicatos, ejidos), actúen como su(s) partido (s), en alianza con el Estado. Puede discutirse si esto es o no expresión de su atraso político. Lo que es innegable es que esta situación está arraigada en la historia más profunda del pueblo mexicano y que, en momentos cruciales, de emergencia, le ha servido a la Nación para avanzar, al Estado para fortalecerse y a las masas para mejorar su situación material”¹⁰.

Esa descripción de la relación entre Estado y organizaciones de masas, que ha sido fuente de todo tipo de críticas: “atraso político”, escaso desarrollo de la conciencia de clase, manipulación política por parte del gobierno y del Estado, adquiere desde la perspectiva de los autores, un carácter absolutamente diferente. Ya que, según su apreciación, no se trata de que el Estado haya hecho un uso político de su relación con las organizaciones sindicales o que éstas sólo sean expresión de la dependencia política de las masas. Lejos

¹⁰ Rolando Cordera y Carlos Tello, *México La Disputa por la Nación. Perspectivas y opciones de desarrollo*, México, Siglo XXI, 1981 Pp. 129-130

de ello, las masas han buscado ejercer su participación política a través de las organizaciones sindicales y también, establecer una alianza con el Estado: representación política, capacidad de ejercer presión sobre el gobierno, expresión de demandas sociales, económicas y políticas. Las organizaciones han cumplido así funciones de lo más diversas siempre a partir de una relación de colaboración con el Estado. Por supuesto que no existe, para los autores, una definición a priori de lo que el Estado mexicano es ni de cuál es su función, sino que eso se definirá —como ocurrió en el pasado— por la capacidad del movimiento popular de incidir en la política estatal dotándola de un contenido popular.

Para este sector de la izquierda nacionalista, el Estado, lejos de ser un simple instrumento de clase, era reconocido por su capacidad de construir y proteger los intereses de la Nación, la cual encarnaba en buena medida, los intereses de los sectores populares. Por ello también, el Estado nacional que dio origen la Revolución y el pacto social sobre el que se erigió todo el modelo de desarrollo posrevolucionario, aún podía ser la base de un modelo que contemplaba las necesidades de los sectores de la población que no fueron incorporados en el pasado.

El protagonismo de lo popular se debía, por una parte, a que fueron esos sectores los más postergados a lo largo de la historia y también a que ellos contribuyeron al desarrollo nacional y en nombre de quienes se hizo la Revolución. Por ello su inclusión era la condición necesaria para que el proyecto nacionalista se realizara: no hay proyecto nacional sin su integración.

Cuando los autores hablaban de nacionalismo referían a: un proyecto que recoge los postulados básicos de la Revolución; el constitucionalismo; el protagonismo de los sectores populares; la preeminencia del Estado en la concreción del proyecto y finalmente, la defensa de la Nación frente a la amenaza que significa la cercanía de los Estados Unidos. Acciones defensivas que conforman toda una tradición de lucha y de posiciones políticas frente a la potencia imperialista y un ‘conjunto de postulados’ que tienen por objeto la creación de un espacio político y económico nacional. El nacionalismo se identificaba entonces, con el ideario que asociaba nación con nacionalización: acciones que buscan devolverle a la Nación sus bienes, arrebatarlos a los particulares que han intentado beneficiarse a costa de las mayorías¹¹. Pero Nación no

¹¹ “A la vez el nacionalismo mexicano no se ha reducido únicamente a la defensa de la nación frente a la expansión imperial; también se ha traducido en un conjunto de acciones y postulados relacionados con la construcción o la creación de un espacio económico y político nacional. En México, por ello puede afirmarse que el nacionalismo “no deriva del sustantivo “nación” [...] sino del verbo “nacionalizar”; por eso el nacionalismo no aparece entre nosotros, como sucede, por ejemplo, en la mayoría de las naciones

se entendía simplemente un conjunto de personas o de grupos sociales. La Nación alcanzó su máxima expresión en el Estado nacional y precisamente por ello el Estado es en ese proyecto una pieza clave para su concreción: tiene un carácter popular porque se erige en representante de la Nación (ésta es a su vez sinónimo de pueblo trabajador); es también el responsable del cumplimiento de los principios constitucionales y de su defensa, asume la dirección de la economía y reconoce que esta tiene un carácter estrictamente político. La otra propuesta, sostenía que el proyecto socialista sólo era viable en México si se ligaba estrechamente a la democracia y a la defensa de la Nación. A diferencia de la perspectiva anterior que buscaba actualizar muchos de los principios de la matriz nacional-revolucionaria, ponía especial atención a la forma en que esos principios podían articularse con el programa del socialismo.

Carlos Pereyra, uno de los referentes de esta propuesta, sostenía que el ‘socialismo nacional’ reconocía que la lucha por la democracia y el socialismo eran al mismo tiempo una lucha por la constitución plena del Estado nacional: un Estado independiente frente al exterior, que represente efectivamente al conjunto de la Nación y permita su expresión a través de sus diversas organizaciones.

Fundamentalmente, el socialismo nacional era un proyecto que, junto con la defensa de los intereses del bloque social dominado, debía atender y poner en pie de igualdad los intereses de la Nación en su conjunto. Dicho proyecto debía recoger y resignificar la historia de las luchas populares y la experiencia del movimiento popular, para convertirlas en un referente para la acción política presente.

En México -decía Pereyra-, “una de las conmociones sociales más alucinantes del siglo veinte dio muestras sobradas del ímpetu que en este país tiene la corriente histórica inclinada a constituir una Nación que dé cabida a las demandas populares y a los afanes democráticos. El hecho de que el grupo gobernante se considere heredero exclusivo de esa corriente histórica y el hecho, además, de que el rumbo adoptado por la política oficial no corresponda al contenido nacional, popular y democrático de esa corriente, lejos de conducir al abandono de las tradiciones de lucha del pueblo mexicano, se convierten en hechos que compelen a rescatar ese legado histórico”¹²

La Revolución constituía, sin dudas, la experiencia histórica ineludible para cualquier proyecto socialista y para cualquier proyecto político. Esa Revolución, cuyo carácter

europas, como una ideología conservadora, sino progresista: devolver a la nación, representada por el Estado, bienes que antes estaban en manos de particulares” *Op. Cit.*,107

¹² Carlos Pereyra, “Socialismo, Nación y Partido”, Revista *El Machete*, núm. 10, México, febrero de 1981.

popular y democrático parece indiscutible, buscó incorporar a las grandes masas de la población a un nuevo proyecto que suponía, sobre todo, una nueva concepción de la Nación mexicana. Esa nueva idea de Nación tuvo como objetivo fundamental incluir a los sectores populares como miembros plenos, sus demandas, sus intereses, sus necesidades. El hecho de que el grupo triunfante en la Revolución se haya “apropiado” de esa experiencia histórica y la haya orientado en función de sus propios intereses, no debía conducir a la izquierda a abandonar esas tradiciones de lucha. Por el contrario, sólo en la recuperación de sus contenidos, nacionales, populares y democráticos, podría consolidarse el proyecto socialista. Pereyra reconocía que muchos de esos contenidos fueron incorporados en la Constitución de 1917, no obstante, sostenía que la mayoría de los gobiernos posrevolucionarios poco o nada hicieron por volverlos efectivos¹³. Sin embargo, la tradición revolucionaria y muchas de las demandas por las que se movilizaban las masas constituían parte de la memoria colectiva de los sectores populares y no podían ser negadas u olvidadas si lo que se buscaba era una transformación social y política centrada, precisamente, en estos sectores.

La Nación: experiencias y expectativas para imaginar a la sociedad

Como ya se mencionó, no hay en México una propuesta alternativa a la concepción económica dominante que tuviera la fuerza suficiente como para ser creíble para un sector importante de la población o como para disputarle su lugar central.

En lo que a la explicación de las causas de la violencia y a la política de seguridad que de ella se deriva, hay una multiplicidad de enfoques pero dos de ellos se han vuelto referentes: por un lado, el elaborado por Joaquín Villalobos (que es el fundamento de la política de seguridad del gobierno), por otro, el de Fernando Escalante. Sintéticamente, el primero entiende que las causas de la violencia se encuentran en la deficiente institucionalidad, la crónica preeminencia de una cultura de la ilegalidad y la consecuente debilidad del Estado, entendido éste como aparato¹⁴. Para Escalante, en cambio, las causas son coyunturales. Básicamente la violencia se explica porque la intervención del Ejército habría desintegrado viejas redes sociales, políticas e institucionales, que aceptadas por la corrupción, representaban canales de interrelación entre las diferentes

¹³ Pereyra reconoce que Lázaro Cárdenas no solo es una excepción dentro de los gobiernos posrevolucionarios, sino que constituye el período de mayor alcance del programa nacional y popular.

¹⁴ Una conceptualización en la que se distingue al Estado como aparato del Estado como forma puede consultarse en: Lechner, Norbert 1985, “Aparato de Estado y Forma de Estado”, en Julio Labastida Martín del Campo, coordinador, Hegemonía y alternativas políticas en América Latina, Siglo XXI, UNAM, México.

instancias institucionales y la sociedad. Mientras para el primero la ‘guerra contra el crimen organizado’ es la solución, para el segundo constituye el problema¹⁵.

Lo destacable es que ninguno de ellos propone una reconstrucción integral de la comunidad política desde nuevos referentes.

¿Por qué pensar que la solución a los problemas de la exclusión, la fragmentación y desagregación producidos por el neoliberalismo y la violencia puede encontrarse en la reconstrucción nacional?

Para comenzar, porque ambos problemas están íntimamente entrelazados, aunque ello no supone una causalidad lineal. Esto quiere decir que no hay relación simple del tipo: el neoliberalismo produce pobreza y esa es la condición propicia para el surgimiento de la violencia¹⁶. Si se piensa en reconstrucción nacional es tanto por las especificidades de México, como por las dimensiones y características del problema y de la tarea que hay que desarrollar.

La recuperación de la idea de Nación no implica creer que hay que retornar a esencias identitarias ya existentes. Por el contrario, la Nación siempre es *cuestión y proyecto*. *Cuestión* porque nunca deja de ser una pregunta; porque aunque tuvo expresiones históricas concretas, siempre estará abierta a redefiniciones y adaptaciones. También porque conceptualmente hay que preservar el carácter polémico, problemático e interrogativo que en la práctica política siempre tuvo. Carácter que le restituye la dimensión política que tanto algunos nacionalistas como sus detractores tratan de eliminar. *Proyecto* porque al tiempo que es un reconocimiento del pasado y del presente, es básicamente una proyección hacia el futuro. También porque implica una construcción que empieza a realizarse desde el mismo momento en que se la imagina. Así, la Nación no es algo a construir una vez finalizada ‘la guerra’ sino la posibilidad misma de ponerle fin a ésta, de empezar a reunir y darles nueva entidad a las partes, que el neoliberalismo y la violencia separaron.

Pero además de idea rectora la Nación permite reconstruir y redefinir el papel del Estado, re-vivir a la sociedad, reintegrar el territorio, todo ello por medio de una restitución de la centralidad de la política.

El neoliberalismo instituyó la idea de que el Estado era el ‘enemigo de la sociedad’, uno de los males a combatir. Con la ‘guerra contra el narcotráfico’ pareció constatarse esa

¹⁵ Sobre estas posturas ver <http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102417>

¹⁶ Esta es la explicación que sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD-PT-MC y gran parte de la izquierda mexicana.

caracterización. En ella el Estado no solo evidenció su impotencia, sino que renunció a la obligación de garantizar la seguridad de la población y en buena medida fue también su victimizante. Ante cada hecho de violencia, la primera reacción del Estado y el gobierno, fue culpabilizar a las víctimas¹⁷ y desligarse de sus responsabilidades más esenciales.

En la dimensión social el neoliberalismo derribó todo imaginario de igualdad y pertenencia que la Revolución, aunque no había realizado, sí había instaurado. El discurso del individuo y la libre competencia condenó por ‘premoderna y arcaica’ toda idea de solidaridad y comunidad, como así también todo vínculo social que no estuviera motivado por el interés. Llegó incluso a postular la distinción de regiones viables e inviables en el país. El norte pasó a ser el modelo de modernidad y el sur, el México bronco. A su vez, el imaginario de la igualdad fue reemplazado por la prédica del individuo y la competencia. Todo ello constituyó el trasfondo ideológico con el que se buscó legitimar la exclusión social, exclusión que con la irrupción de la violencia se volvió desintegración. Ello explica en parte, la escasa solidaridad social e identificación para con las víctimas. Así, no deja de llamar la atención que en las regiones en donde la violencia es menor, la población no la viva como un problema propio. En el Distrito Federal, por ejemplo, no se asume que el problema de Ciudad Juárez, Monterrey, Veracruz, Tamaulipas es también su problema.

Así, a los directamente afectados- tanto por la desigualdad como por la violencia-, ante la falta de respuesta estatal y social, no les queda otra que refugiarse en sus lazos más inmediatos. Lazos comunitarios definidos por lo cercano, lo inmediato, lo común, que están siendo hoy erosionados por una violencia que además genera desconfianza y extrañeza.

En cuanto a la dimensión política, que el neoliberalismo redujo a la gestión, con la violencia, lejos de rescatarse su potencialidad asociativa, se reforzó su carácter represor y disolutorio. La máxima expresión de ello fue el discurso del partido en el gobierno durante la última campaña electoral.

Si al actual momento lo podemos conceptualizar en términos de desnacionalización no es precisamente por el abandono oficial de ciertas imágenes pintorescas de lo mexicano, que

¹⁷ El 31 de Enero de 2010 un grupo de sicarios irrumpió en una fiesta de estudiantes en Villas de Salvalcar, Ciudad Juárez asesinando a 18 personas; en su primera declaración luego de conocer el hecho, Felipe Calderón afirmó que se trataba de un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. El 23 de Septiembre de 2011 fueron arrojados 49 cuerpos en una avenida central de la ciudad de Veracruz. A las pocas horas y antes de iniciada cualquier investigación el procurador de justicia del Estado de Veracruz afirmó que todos eran miembros del crimen organizado. Las reacciones de las autoridades ante hechos de violencia en diferentes lugares del país fueron similares y reiteradas.

al tiempo que se las mantiene y exaltan, las vuelve políticamente inocuas. Sino por la pérdida de patrimonio nacional y de derechos laborales, sociales y económicos de la población, que las llamadas reformas estructurales, entre otras, representan y sintetizan. Si anteriormente Arnaldo Córdova entendía a la Nación como nacionalizar, hoy podemos pensar a la desnacionalización como privar y privatizar.

La reconstrucción en clave nacional es, sin dudas, una empresa compleja que al tiempo que reconoce antecedentes exige también un ejercicio de imaginación y creatividad. El cardenismo nos señala que es posible imaginar y construir una sociedad ahí donde no la hay. También, en tanto experiencia a recuperar, nos indica que es preciso hacerlo desde las condiciones concretas existentes y, por ello, constituye un referente y no un modelo a reeditar. Las de Aricó, Cordera y Pereyra son en cambio referencias teóricas a las que hay que revalorizar sin olvidar que fueron elaboradas en y para una realidad diferente. Si Cárdenas tuvo que construir una sociedad de masas a partir de los retazos que habían quedado después de la guerra, esos autores pensaron en momentos en que esa sociedad de masas profundizaba su declive y antes de la experiencia neoliberal. Por eso, el desafío presente es en algún sentido similar a estas experiencias, pero también profundamente diferente.

Revalorizar al Estado y redefinir su papel como actor social fundamental ya no puede hacerse exclusivamente sobre la base de un modelo corporativo, no porque asuma el discurso neoliberal que demonizó a las organizaciones sociales, sino porque en el momento actual sería insuficiente. Tampoco su misión debe ser excluyentemente la homogenización social. El Estado actual, al tiempo que debe ser garante de los derechos fundamentales, tiene además que reconocer el carácter diverso y complejo de la sociedad. Si se asume una concepción no esencialista de la sociedad, es decir, si se reconoce su carácter políticamente construido que, como la comunidad, se basa en lo común, pero que, a diferencia de ésta, lo hace también en lo diferente y en lo diverso, la función del Estado será al mismo tiempo homogeneizar (en tanto reconocimiento y garantía de derechos básicos para todos), pero también facilitar y propiciar la expresión de la diversidad.

La Nacional es una empresa ideológico-cultural con un fuerte contenido de gestión, en tanto no se trata solo del reconocimiento y promulgación de derechos sino también que su cumplimiento debe estar garantizado. Esto exige, como ya mencionamos, una revalorización, pero también una ampliación del Estado y de la provisión de bienes y servicios por parte de este. Solo así se podrá al menos transmitir la sensación de que el

Estado es la expresión institucional de una comunidad que está dispuesta a ‘apapachar’¹⁸ a sus víctimas, a garantizarles atención, justicia y cobertura.

Este sería un paso fundamental para comenzar a resanar los lazos comunitarios, pero también para trascenderlos en dirección a la reconstrucción de la sociedad. Ello ayudaría a hacernos sentir que algo que no sucede en nuestro espacio inmediato también nos sucede.

Como sostuve al inicio, el populismo demostró en el pasado y en el presente que, con todas sus límites y deficiencias, es capaz de hacerse cargo de esa tarea. Por medio de la articulación de demandas posibilitó la creación de nuevas identidades complejas, las que a su vez propiciaron la superación de la fragmentación. Su invocación al Pueblo, al tiempo que implica una “contaminación identitaria”, revaloriza y rescata a los olvidados y lastimados, sin por ello postergar a otros sectores y actores. Lejos de lo que sus detractores pregonan, el populismo representa además, la posibilidad de construcción, organización e institucionalización de lo social: la historia y el presente demuestran que produjo un extraordinario fortalecimiento y expansión estatal y una multiplicación inaudita de organizaciones de base.

Además, si los populismos históricos demostraron que podían ser una respuesta a la demanda modernizadora de homogeneización social, los actuales demuestran que al menos no están negados para reconocer y fomentar la diversidad y complejidad, sin que ello implique soslayar la igualdad.

Hace tres décadas Aricó evaluaba como un rasgo negativo de las sociedades ‘occidentales periféricas’ la enorme potencialidad que la política tenía en ellas. Su capacidad tanto para configurar y regular el conflicto, como para modular a la sociedad era, al mismo tiempo, una amenaza permanente para la estabilidad. Hoy podemos conjeturar que, además de una amenaza, esa capacidad puede ser una oportunidad para implementar cambios que, en poco tiempo, produzcan resultados significativos. Ello permite, pese a la sombría situación actual, abrigar alguna esperanza. En México, el momento de la política parece asomar con el despertar del incipiente movimiento estudiantil y de las organizaciones de víctimas de la violencia, que recuperan la memoria de las luchas y de la organización. Su carácter democrático es innegable, el popular dependerá de cuanto puedan articularse con otras demandas incumplidas. Su contenido nacional, dependerá a su vez, de la extensión social y territorial y de las transformaciones sociales y estatales que produzcan.

¹⁸ En México esta palabra remite a un gesto afectuoso o cariñoso.

Bibliografía

- Aricó José M., *La cola del diablo*, Colección: Metamorfosis, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005
- Aricó, José María entrevista Crespo Horacio y Marimón Antonio, en *Revista de la Universidad de México*, Vol. XXXIX, 24, abril de 1983. Reproducido en *Vuelta Sudamericana*, Vol. 1, 2, septiembre de 1986, Buenos Aires, correcciones de J. M. Aricó.
- Cordera Rolando y Tello Carlos, *México La Disputa por la Nación. Perpectivas y opciones de desarrollo*, México, Siglo XXI, 1981 Pp. 129-130
- Lechner, Norbert 1985, “Aparato de Estado y Forma de Estado”, en Julio Labastida Martín del Campo, coordinador, *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*, Siglo XXI, UNAM, México.
- Partido Revolucionario Institucional, Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012 – 2018: http://www.ulsamex.com/votolasallista/docs/Plataforma_PRI.pdf
- Pereyra, Carlos, “Socialismo, Nación y Partido”, *Revista El Machete*, núm. 10, México, febrero de 1981.
- Portantiero Juan Carlos, *Los usos de Gramsci*, Series en Colección: El tiempo de la política, Folios Ediciones S.A., México, 1981;
- Rabotnikof Nora y Aibar Julio, “El lugar de lo público en lo nacional popular: ¿una nueva experimentación democrática?”, Nueva Sociedad, Buenos Aires (en prensa).